



El silencio también comunica. Y, en política, a veces dice más que un discurso interminable. Ayer, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, dedicó varios minutos a hablar del presunto abuso sexual cometido contra una joven reportera que, mientras realizaba su trabajo, habría sido agredida por el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez. Sin embargo, entre tantas palabras faltó lo esencial: una condena clara, una postura firme y un mensaje inequívoco de respaldo a la víctima.

La verdad es que el caso no puede tratarse como un episodio aislado ni resolverse con explicaciones ambiguas. La gravedad de la denuncia exige decisiones inmediatas, transparencia y voluntad política. Todo lo demás suena a evasión y ya pasaron varios días.

Además, existen antecedentes que vuelven todavía más preocupante la respuesta institucional. Durante la actual administración ya se registraron otras dos quejas por violencia contra periodistas. El último derivó en dos recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y obligaron a que elementos de la policía municipal recibieran capacitación específica. Los hechos, por sí solos, muestran un patrón que no debería minimizarse.

Y es que cuando las agresiones se repiten, dejan de ser excepciones para convertirse en síntomas de una cultura institucional que tolera excesos o reacciona demasiado tarde. Ese es el verdadero fondo del problema.

La libertad de prensa y la integridad de quienes informan no admiten medias tintas. Tampoco las víctimas de violencia sexual. Ricardo Moreno aún está a tiempo de demostrar que entiende la dimensión del momento, pero hacerlo requiere mucho más que discursos. Exige autoridad, decisiones y congruencia. Eso es, justamente, lo que hasta ahora ha faltado.

Ajustes presupuestales

En tiempos de ajustes financieros, alcanzar acuerdos también es una señal de estabilidad institucional. Ayer, la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido, sostuvo una reunión con el secretario de Finanzas del Estado de México, Óscar Flores, para cerrar las negociaciones del presupuesto correspondiente a este año, un proceso que atravesó por incrementos y posteriores reducciones debido al cambio en el calendario electoral.

La verdad es que estos movimientos obligaron a revisar cifras y prioridades. Al final, el Instituto dispondrá de poco más de 261 millones de pesos, una cantidad menor a la prevista inicialmente, pero suficiente para mantener sus responsabilidades con orden y disciplina, o eso se espera de la autoridad electoral.

Además, el entendimiento entre ambas instituciones envía un mensaje positivo. Más allá de los ajustes, prevaleció el diálogo y la disposición para encontrar un equilibrio entre las necesidades del organismo electoral y las posibilidades financieras del estado. Ese tipo de acuerdos fortalece la confianza pública y permite que el trabajo institucional avance con certeza.